

**FLACSO**

**PERU: LOS ESCENARIOS POSIBLES**

Luis Pásara



**FLACSO**  
SEDE ECUADOR

**Conferencias**

**PERU: LOS ESCENARIOS POSIBLES**

Luis Pásara

FLACSO - Bolivia

© **FLACSO Sede Ecuador**

**Serie Conferencias No. 10**  
**Edición preparada por la**  
**Comisión de Publicaciones,**  
**Unidad de Ejecución.**  
**Heraclio Bonilla**  
**Coordinador**

**Asistente Editora: Maritza Aráuz**  
**Diseño Gráfico: Roberto Haro F.**  
**Impresión: Imprenta FLACSO**  
**a cargo de César Campoverde**

**Quito-Ecuador, Mayo de 1992**

## **PERU: LOS ESCENARIOS POSIBLES**

Año y medio después de haberse iniciado el gobierno del Presidente Alberto Fujimori, el futuro de la economía peruana es objeto de un intenso debate que no sólo es técnico sino que también está integrado por factores políticos, ideológicos y hasta psicológicos. Hay quienes creen, y confían, en que la rigurosa aplicación de un recetario -al cual se conoce como "el consenso de Washington"- producirá frutos sanos en el mediano plazo. Y hay quienes observamos que: 1) esas amargas medicinas no han demostrado eficacia en ningún país del mundo y 2) el nivel de destrucción social que ocasionan puede precipitar la muerte del paciente. Unos y otros formulan pronósticos y los objetantes borronean alternativas embrionarias.

Las cosas parecen ser bastante distintas cuando se mira al otro gran problema que vive el Perú: la subversión. No se cuenta con una estrategia que esté siendo aplicada; tampoco parece haber alternativas sólidas a la mano; y, finalmente, muy pocos se atreven a hacer pronósticos acerca de lo que el desarrollo del fenómeno puede significar para el Perú. Desde la intuición de un vacío por delante, se admite -de manera esporádica y no siempre

en voz alta- que aún cuando el actual curso de acción frente a lo económico produjera ciertos resultados positivos, encuentra un límite probablemente insuperable en el avance subversivo, para el cual hasta ahora nadie parece atinar a encontrar formas eficaces de contención, ya que no de solución.

Este artículo se atreve a dibujar algunos escenarios posibles, que se configurarían en los años que restan de la década, a partir de la existencia de los movimientos armados peruanos. Aunque éstos son el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA -y podrían surgir otros en los próximos años-, el análisis y el ejercicio que siguen están formulados con base en Sendero Luminoso, principal actor de la escena.

## I

Empecemos por perfilar algunos rasgos de ese actor principal, cuya naturaleza tiende a ser desdibujada en el Perú por un manejo de los medios de comunicación que insiste en:

- a) llamarlos "delincuentes subversivos", recurso de inspiración militar que se imagina útil para combatirlos;
- b) etiquetar sus actos como "demenciales", es decir, irracionales e incomprensibles;
- y/o c) pretender que la actuación subversiva es objeto de un rechazo prácticamente unánime por parte de la población. Tan burdo manejo "sico-social" -respecto al cual puede contrastarse notables y valiosas excepciones como el libro *Sendero*, de Gustavo Gorriti- ha decidido ignorar la naturaleza realmente política de Sendero Luminoso y los verdaderos alcances de su desafío al régimen vigente. Opción que, desde el premeditado objetivo de confundir a la población respecto al tema, confía algo ingenuamente en la omnipotencia de la manipulación.

omnipotencia de la manipulación.

Un esfuerzo de sinceramiento respecto a aquello que se está enfrentando debe reconocer que, si bien no se trata de una revolución con amplio respaldo popular como aquellas ocurridas en otros países del Tercer Mundo, tampoco estamos ante un grupo insurgente que avanza exclusivamente con base en la intimidación y el terror. Más allá de los centenares de muertos -en las masacres de los penales, de 1986, y en enfrentamientos con las fuerzas del orden- y de detenidos, están los estimados que pueden formularse a partir de las encuestas. La más reciente es de julio de 1991 y es una indagación del grupo APOYO, publicada en el mensuario *Perú Económico*. A la pregunta acerca de si el terrorismo es justificable en el Perú de hoy, 17% de los limeños respondió afirmativamente; pero en el estrato más pobre de la muestra -que corresponde al 40% de la población de la capital- el porcentaje trepaba a 23%. Sendero Luminoso, pues, cuenta con una base social significativa que incluso ahora -después de casi doce años de lucha- no parece haber explotado suficientemente.

El segundo rasgo que interesa examinar es la capacidad de adaptación de Sendero Luminoso. Quienes pensamos que la rigidez dogmática y el autoritarismo vertical del movimiento serían contenidos por esa suerte de marea negra que es la anomia que ha ido expandiéndose en la sociedad peruana durante la década pasada, nos equivocamos. Sendero Luminoso ha demostrado -en las zonas productoras de coca, particularmente- que sabe combinar la inmovible perspectiva estratégica con la flexibilidad táctica, que le permite pactar con el narcotráfico o colindar con aquella autoridad que no está dispuesta a enfrentarlo y a la que el partido, de momento, no le interesa eliminar. Estamos, como era de preveer, ante un mutante, que ya aprendió a combinar provechosamente seducción y amenaza, como se deduce de la manera en que se aproxima a algunas organizaciones no gubernamentales de

desarrollo; y que, así como se sirve de lazos familiares, acaso también sabe valerse de otros recursos tradicionales: el soborno, por ejemplo. La flexibilidad le añade capacidad de penetración.

Esta es una de las razones por las cuales Sendero Luminoso ha avanzado tanto y sigue avanzando. Quienes en Lima se inyectan cotidianamente dosis de tranquilidad se valen, con frecuencia, del recurso de "pero-no-creo-que-puedan-tomar-el-poder". Subyace en tal afirmación una concepción física del poder, que usualmente se localiza en el palacio de Pizarro. Pero si el poder se conceptúa como el control ejercido sobre las relaciones sociales, habría que admitir que *Sendero Luminoso está tomando el poder*. Lo toma cuando cobra cupos a empresarios y a narcotraficantes, controla carreteras y accesos a barriadas, exagera y violentiza conflictos sociales, atemoriza jueces o paraliza a quienes podrían denunciar su presencia.

Sendero Luminoso es el principal actor político en la escena peruana. Es el único dotado de una visión estratégica y de la capacidad para volver realidad su proyecto político, como se ha visto a lo largo de más de una década. En ese acercamiento forzado, y sangriento, de la realidad al proyecto, Sendero Luminoso ha sabido beneficiarse inteligentemente de la debilidad del adversario. Esa es otra de las causas de peso que explican el avance subversivo: las flaquezas de quienes se le oponen.

## II

Sendero ha logrado definir a su adversario: durante diez años sólo el Estado ha enfrentado a Sendero Luminoso. Este, para alcanzar su objetivo de delimitación del enemigo,

se metió en esa vieja fisura nacional que separa a Estado de sociedad. Empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales -e incluso políticas- creyeron que combatir la subversión era asunto del Estado; específicamente, del gobierno.

Las encuestas que preguntan periódicamente qué haría el entrevistado si es testigo de un acto subversivo muestran la neutralidad mayoritaria. Que, me parece, no es resultado directo y nítido de los graves riesgos que sobrevienen al oponerse a Sendero Luminoso. Detrás de esa evasión de responsabilidad, intentada mayoritariamente por los peruanos respecto a la subversión, hay explicaciones. Lo indefendible del Estado peruano es una de ellas; muy poderosa. Y en los sectores de élite, la cortedad de vista cobra un peso decisivo.

Es verdad que hoy parece haber un cambio. Que se deriva, en parte, de que Sendero Luminoso ha redefinido al adversario, para incluir a las organizaciones sociales populares que no ha logrado controlar, influir o neutralizar. Esta decisión le significa situar en la vereda opuesta a un sector de población, al cual combate directamente con el terror; a esto se debe el mayor número de dirigentes populares asesinados en 1991 y la búsqueda de un feroz escarmiento en el caso de la lideresa y teniente alcalde de la barriada limeña de Villa El Salvador, María Elena Moyano, cruelmente asesinada el 15 de febrero de 1992. Pero Sendero Luminoso sigue contando con que -para valernos de una gruesa cuantificación ilustrativa- en los sectores pobres, de cada cinco personas una le guarda cierta simpatía, otra lo rechaza pero tres padecen una suerte de síndrome de inmunodeficiencia, que al neutralizar la capacidad de defensa social permite el avance subversivo y esteriliza los esfuerzos para combatirlo.

Además el Estado ha hecho y hace pocos esfuerzos para combatirlo. Si ponemos al margen el trabajo, generalmente acertado, de la policía civil especializada en la lucha antisubversiva, el resto han sido palos de ciego. Esto es, matanzas indiscriminadas -que

proveen de nuevas semillas a la subversión- o aparatosas movilizaciones de tropas para repintar las paredes universitarias decoradas con lemas insurgentes. El Estado y los tres gobiernos democráticos que han tenido que enfrentar a Sendero Luminoso desde 1980 han carecido de estrategia para combatirlo.

Adicionalmente, el Estado hoy está quebrado. Una quiebra que no sólo es fiscal -lo que ya es grave, puesto que deja sin recursos materiales la tarea antissubversiva- sino también moral. En los últimos años, la corrupción y el manejo del poder en provecho propio -singularmente por el ex-presidente Alan García- han tenido el efecto de "privatizar" el Estado. Esto es, se ha usado y se usa el aparato estatal de acuerdo a intereses particulares y cortoplacistas, para los cuales el fenómeno subversivo es asunto de prioridad nula. El sistema policial-judicial se halla anulado por el avance de esta otra privatización.

El gobierno de Alberto Fujimori no tiene un proyecto de Estado. Es presa -como la mayor parte de la élite peruana- de la propuesta de moda internacional que obsesivamente aconseja cómo reducir el aparato estatal, cómo hacer que se desentienda del mayor número posible de responsabilidades. El Estado en remate es menos capaz, si cabe, de combatir a Sendero Luminoso, debido a que se está deshaciendo de los recursos patrimoniales y jurisdiccionales -incluso mediante la privatización de los servicios educacionales que prestaba el Estado- que le permitirían poner en práctica una estrategia antissubversiva, en el momento en que exista. El viejo sueño -vigente desde Haya de la Torre hasta la revolución militar de Velasco Alvarado- de montar un Estado que transforme a su sociedad se ha disipado sin que lo sustituya un perfil de Estado moderno y eficiente. Parecería que hoy el mejor Estado posible es el que, salvo cobrar impuestos, no deje sentir su existencia. El líder máximo de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, debe sonreír, complacido.

### III

La crisis que vive el país no es sólo, ni principalmente, económica. La faceta económica de la crisis precipita y profundiza otros aspectos, más importantes, de ella. Uno es la debilidad del tejido social, el carácter fundamentalmente cupular de las "organizaciones representativas" -barriales, empresariales, laborales, profesionales, etc.- y la condición vastamente inorgánica de la mayoría de la población. Si bien la atomización es mayor en los sectores bajos de la sociedad -donde predomina la no pertenencia a ninguna asociación en una proporción de 4 a 1, según revelan diversas encuestas-, el rasgo es general. Este es un factor que agrava la incapacidad social de reaccionar y defenderse, y facilita el trabajo de quien, como Sendero Luminoso, tiene que cooptar o neutralizar -mediante la intimidación y el asesinato selectivo- a relativamente pocas cabezas dirigentes, situadas en las puntas de débiles cadenas de representación.

Los actores políticos carecen de un proyecto que guarde relación de magnitud con la gravedad de la situación. Peor aún, dos de las más importantes fuerzas han conocido recientemente procesos de severo debilitamiento. El APRA se ha desgastado numéricamente -desde la mitad del electorado que votó por Alan García en 1985 hasta su núcleo esencial ahora, equivalente a un quinto de la ciudadanía- y en cuanto a capacidad de propuesta, luego de detentar el timón de un gobierno que en cinco años agravó severamente todos los males nacionales. El frente Izquierda Unida se ha evaporado como la alternativa que pareció ser entre 1983 y 1988 -cuando llegó a captar un tercio del electorado y logró elegir a Alfonso Barrantes como alcalde de Lima- y cobra ahora cierta importancia sólo en el nivel local y regional, donde enfrenta las dificultades de ser o compartir gobiernos municipales y regionales, bajo el asedio de Sendero Luminoso.

En la medida en que hay elecciones, los dos viejos partidos de centro derecha -Acción Popular y el Partido Popular Cristiano- realizan aquella tarea que, hasta cierto punto, sí saben desempeñar: competir en las ánforas para ganar cargos. Incapaces de enlazar Estado y sociedad, como correas de transmisión de demandas y necesidades sociales, estos partidos - igual que el APRA y el IU- se limitan a participar sin imaginación en un juego electoral donde la ciudadanía, mayoritariamente insatisfecha, ha venido buscando otros actores desde las elecciones municipales de 1989 y, para quebranto de Mario Vargas Llosa, en las presidenciales de 1990.

La única excepción entre los actores políticos la constituye *Libertad*, el movimiento que fundara precisamente Vargas Llosa. Aparte de Sendero Luminoso, este partido es hoy el único actor con capacidad de propuesta a la sociedad peruana. Lo demostró como motor ideológico del frente de derecha que respaldó a Vargas Llosa, durante la campaña electoral de 1990, y lo sigue demostrando ahora en el Parlamento. Desempeña ese rol animador, habiendo incorporado a la política a un contingente ciudadano -de un alto nivel de capacidad y organización- que mayoritariamente no había participado en política. Fuertemente alineado con el neoliberalismo, *Libertad* corre el riesgo de ver desgastarse el atractivo de su propuesta en la medida en que Fujimori gobierna de prestado, con recetas neoliberales. No obstante, este sector político es uno de cuyo desempeño -del rol que decida o pueda jugar- depende en alguna medida la definición de escenarios en los años que vienen.

La Iglesia Católica, en cambio, no parece destinada a jugar un papel crucial. Dividida internamente, en razón de diferencias que -desatadas por la teología de la liberación- son eclesiales y políticas a la vez, padece un empate que la lleva a inhibirse exteriormente para defender así su existencia institucional. No puede descartarse que algunos obispos intenten por cuenta propia alguna gestión que perturbe este canon, como llegó a hacerlo

grotescamente el Arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzamora, para favorecer a Vargas Llosa en las elecciones presidenciales de 1990. Pero, más allá de los reclamos y reconocimientos que se le hagan, la Iglesia está condenada a una forzosa neutralidad pública que, en una institución de tiempos largos, probablemente dure todo el período que tome resolver la crisis peruana.

Las Fuerzas Armadas han de jugar, en todo caso, un rol principal. Su condición de detentadores de la fuerza, hace imposible una abstención. Pero el menú de opciones probablemente es más complejo que en-favor o en-contra de un golpe, que es como frecuentemente se intenta reducir el perfil de este actor.

Según el texto preparado por Gordon McCormick -en el National Defense Research Institute de la Rand Corporation, en Washington, bajo contrato con el Departamento de Estado- "las Fuerzas Armadas [peruanas] sufren de una serie de debilidades institucionales y materiales", entre las cuales deben contarse su limitada capacidad para enfrentar una guerrilla de base rural y el haber sido objeto de exitosa infiltración por parte de Sendero Luminoso. "El ejército tiene una apreciación insuficiente de las dimensiones del problema que enfrenta, poco interés en entender los principios de la contrainsurgencia y medios insuficientes para conducir una campaña no convencional exitosa", afirmaba en 1990 este informe para el cual resultaba particularmente grave la limitación castrense para recoger y procesar información de inteligencia sobre la subversión.

Hay otros elementos de importancia que pueden ser sumados para caracterizar los problemas que enfrentan las Fuerzas Armadas. Uno es la falta de una doctrina que reemplace a aquélla que inspiró en 1968 la revolución militar de Velasco. Fracasado en la década del setenta ese intento de reformar la sociedad para evitar la insurgencia revolucionaria, y con una insurgencia ahora en pleno desarrollo, los militares peruanos no han elaborado una

doctrina institucional propia; según parece, algunos de sus jefes y cuadros se han limitado a echar mano, sin beneficio de inventario, de experiencias antissubversivas como la francesa en Argelia, la guatemalteca y la argentina -que no son precisamente casos exitosos.

El segundo elemento es el alto grado de manipulación que han sufrido los cuadros institucionales durante los tres gobiernos democráticos, según ha notado Julio Cotler. Si entre 1980 y 1985 Fernando Belaúnde se limitó a cuidar que los nombramientos y promociones no encumbraran a quienes pudieran tornarse adversos, Alan García fue mucho más lejos a partir de 1985 y privilegió a gente de su confianza. Fujimori ha ido bastante más allá durante su primer año y medio, en una ruta que sin duda atenta contra el profesionalismo de las Fuerzas Armadas y compromete su fortaleza institucional.

Demolidas económicamente -expuestos sus cuadros a la corrupción, mediante sueldos miserables-, institucionalmente erosionadas, estas Fuerzas Armadas aparecen hoy en la escena política de la mano del gobernante Fujimori. La imagen puede ser equívoca, sin ser falsa. En efecto, un laborioso esfuerzo de intriga palaciega y una necesidad de dotar de alguna base de respaldo a un gobierno que decidió aplicar un plan de gobierno inequívocamente contrario a sus promesas electorales, han confluído para que el presidente rodeado de uniformados sea una repetida imagen, más que simbólica. Pero es arriesgado derivar de ahí que las Fuerzas Armadas estén institucionalmente comprometidas con este gobierno; en parte, debido a las debilidades institucionales que quitan base a cualquier afirmación en ese nivel, y en parte porque la pluralidad interna de posiciones y actitudes debe ocasionar un desfase entre mandos y oficialidad que hace difícil cualquier pronóstico sobre el conjunto. Y que hace aventurado responsabilizar a las instituciones de una opción militarizadora como la que portaron los decretos legalísticos de noviembre último.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas -como la Iglesia- tienen reflejos institucionales

muy marcados cuyo eje pasa por la supervivencia de la entidad. Cuando ésta se ve amenazada, las diferencias pasan a segundo plano y la conducta del conjunto se orientará a defenderse. Y lo harán de la manera en que, bien o mal, aprendieron a hacerlo: con las armas. En ese cuadro, como apunta McCormick, un golpe sería más una necesidad que una opción. La pregunta es: ¿bajo qué circunstancias las Fuerzas Armadas llegarían a creer que el golpe es una necesidad? ¿Basta cierto nivel de mayor desarrollo de Sendero Luminoso? ¿Es necesario un agente externo que induzca esa vía?

#### IV

Washington cobró creciente importancia en el Perú desde agosto de 1990. Hasta donde la información disponible indica, esta importancia se derivó de un silogismo elemental que habría guiado la conducta del presidente Fujimori. Primera premisa: debo conseguir ayuda de Japón. Segunda premisa: Japón exige luz verde de Washington. Conclusión: hay que aceptar lo que Washington exija. Exacto o no el razonamiento, sí parece capaz de hacer inteligible un esquema de gobierno, de los primeros 18 meses, donde lo único que parecía importar es lograr la reinsertión en el sistema financiero internacional, bajar la inflación y privatizar todo lo posible. No han contado, ni cuentan, ni el costo social -que no ha recibido alivio a través de un programa de emergencia-, ni la construcción institucional, contra la cual sigue atentando regularmente la palabra y la acción presidencial, en menoscabo del parlamento, el poder judicial o el servicio diplomático.

El Perú genera hoy líderes autoritarios como Abimael Guzmán. Y en algunos casos, como el de Alberto Fujimori, un hombre elegido con un discurso de consenso, se hace, o se revela, groseramente autoritario en el ejercicio del poder. En todo caso, el autoritarismo

abona el camino de la guerra y no el de la política. Y guerra parece ser lo que reserva el futuro del país, no sólo en lo inmediato.

La continuidad de esta guerra -no sólo la continuación sino la permanencia de sus términos- es lo que define el primer escenario posible. Un paisaje en el cual, sin alteraciones mayores, se profundicen algunos rasgos ya presentes en la situación actual. Un país donde seguiría habiendo elecciones periódicas; la situación económica podría cambiar algo -positiva o negativamente- pero sin dar lugar a modificaciones cualitativas en términos de crecimiento y de distribución del ingreso; se ampliaría lentamente la porción del territorio que se halla fuera del control del Estado, pero Sendero Luminoso no lograría tomar ninguna ciudad ni se extendería más allá de las fronteras. La continuidad, sin embargo, no debe confundirse con una imposible estabilización en este estado: la tendencia real sería de un lento agravamiento que tomaría cuerpo bajo una envoltura que haría pensar en más-de-lo-mismo.

Este escenario, que bien puede ser el de este año y el que sigue, luce como altamente improbable de conservarse por un lapso mayor, excepto si los cultivos cocaleros se extinguieran -por ejemplo, bajo el eficaz ataque de un hongo de origen no precisado que en efecto parece extenderse en el valle de Huallaga, principal lugar de producción de coca en el mundo- o si la cocaína fuera masiva y rápidamente sustituida por otra droga. Podría tratarse de una droga sintéticamente producida o de la heroína, para producir la cual el narcotráfico está sembrando Colombia de amapolas. Si la coca dejara de ser un componente central del drama peruano, éste perdería interés internacional y seguramente los niveles de decisión mundiales dejarían que el Perú se cocine a fuego lento en su propio caldo. El interés internacional por el caso, en cambio, probablemente lleve a la definición de otros escenarios.

El segundo escenario posible corresponde a que una de las dos partes gane el

conflicto: que el Estado derrote a la subversión o que Sendero Luminoso se haga cargo del gobierno. Una victoria sobre Sendero Luminoso presupone -además de fuerzas antisubversivas eficientes, con las que de momento el Perú no cuenta y que no pueden improvisarse- un actor político fuerte y una economía que ofrezca alternativas de progreso al contingente de población joven, educada y sin lugar económico y social donde ubicarse, del cual reclutan cuadros y simpatizantes los movimientos armados. Ni uno ni otro requisito parecen alcanzables en un plazo de tres a cinco años, para el cual se hace el presente ejercicio, puesto que obtenerlos en ese lapso requeriría un proceso de maduración que ya tendría que haber comenzado. Además de esos dos requisitos globales, una táctica exitosa en el combate con Sendero Luminoso exige un factor que ha señalado Fernando Rospigliosi (1992): cancelar el hiato existente entre el pueblo y sus organizaciones, y las fuerzas antisubversivas. En ese sentido, la trágica inmolación de una dirigente como María Elena Moyano parece condenada a la esterilidad, tanto por el hecho de que ella misma no se atreviera a postular un alineamiento popular con las fuerzas del orden, como por la ausencia de una respuesta de parte del gobierno que, luego de producido su asesinato, supiera recuperar ese sacrificio dentro de una propuesta antisubversiva. Por el contrario, el Presidente Fujimori echó mano a su mezquindad gestual, limitándose a ofrecer recompensas a quien denuncie a los líderes subversivos. En favor del desencuentro corre además de la lectura del hecho efectuada públicamente por un dirigente de izquierdas como Javier Diez Canseco (1992) -que prácticamente culpó a Moyano de su muerte-, quien al proponer una tercera posición armada corroboró una tendencia contraria a aquélla sugerida por Rospigliosi.

Ciertamente, acecha la ilusión de buscar un atajo a través de "la mano dura" y ahí es donde el golpe -que seguramente contaría con un sector social que ha ido endureciendo sus puntos de vista políticos en estos años, y fortaleciéndolos con un racismo abierto- aparece

como una posibilidad. Opción tan terrible como probablemente infructuosa porque el baño de sangre sería en definitiva -para usar las palabras con las que Mario Vargas Llosa denunciara en 1986 la matanza, ejecutada durante el gobierno de Alan García, de más de 250 presos senderistas amotinados en tres cárceles- "una poda" que haría reverdecer el árbol de la subversión. La lección, entonces tardíamente aprendida, sería que un proceso subversivo de la profundidad del peruano no puede ser vencido desde el Estado sin un papel protagónico de importantes fuerzas sociales.

Más remota aún aparece la posibilidad de un triunfo senderista. Sendero Luminoso tendría que pasar a una guerra de posiciones, para la cual debería haber constituido un verdadero ejército, del cual hasta ahora hay sólo embriones. Además del requisito militar, Sendero Luminoso tendría que haber alcanzado un nivel de legitimidad política en el país que, pese a las mutaciones tácticas anotadas antes, no parece a su alcance; sobre todo, en los sectores medios. Finalmente, un triunfo de la subversión tendría que contar con la pasividad internacional; y si bien es posible pensar que prevalezca cierto nivel de desinterés internacional por el drama peruano -que, sin embargo, en 1991 no impidió el intento de reinsertión financiera internacional-, es muy distinto imaginar que un posible gobierno senderista fuera visto con indiferencia en el exterior, comenzando por los vecinos Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia.

## V

Si no parece probable una prolongación de la actual situación, ni se ve cómo se podría llegar a corto plazo a que una de las partes en conflicto se imponga a la otra, sólo nos queda la posibilidad de explorar un tercer escenario. En éste se produciría una redefinición de los

términos del conflicto, a partir de un eje central: la intervención exterior.

Dos factores hacen pensar en este nuevo actor; de una parte, la presencia peruana en la escena mundial a través de la exportación de drogas que el Estado peruano no puede controlar; de otra, la capacidad de contagio que alcance el síndrome peruano en los países vecinos.

La droga es, en definitiva, la principal razón por la cual se presta atención al Perú; especialmente, en Estados Unidos. Lo demuestra, por ejemplo, el texto de los acuerdos firmados a mediados del año pasado entre el gobierno peruano y el gobierno estadounidense -sobre ayuda militar-, donde el interés manifiesto de Washington en la ayuda se dirige a la droga -y a hacer intervenir al ejército peruano en su combate-, y subordina a una segunda línea el tema antisubversivo.

La droga no es el único mal peruano de exportación, pero sí el principal por su potencial desestabilizador, capaz de llegar a cualquier escuela de un pequeño pueblo norteamericano. El cólera y los migrantes también se exportan, pero pueden ser mejor controlados, relativamente. La droga tiene un impacto más profundo: penetra más fácilmente el tejido social de las sociedades del norte.

Si un hongo de laboratorio no acaba pronto con las plantaciones de coca, algún otro curso de acción será diseñado en el norte para controlar la exportación peruana de droga. Habida cuenta del estado de las instituciones peruanas -incluidas las Fuerzas Armadas, mejor diagnosticadas en Washington que por los sociólogos peruanos-, una estrategia de reconstitución del Estado peruano probablemente exige -como parece haberse demostrado exitosamente en el caso de El Salvador- un intenso trabajo de reorganización de las Fuerzas Armadas. De ahí que el adiestramiento de dos batallones para realizar tareas de intercepción de droga y combate a narcotraficantes y guerrilleros, previsto por el Convenio Washington-

Lima, puede ser el comienzo de un esquema alternativo.

La intervención exterior puede usar diversas vestimentas. Ser colocada bajo el paraguas de la ONU, como se hizo en la guerra del Golfo Pérsico. O ser formalmente encabezada por los países vecinos al Perú, para los cuales -como ha hecho ver Michael Smith- la alianza narcotraficantes/guerrillas es también un cóctel explosivo, especialmente en los casos de Bolivia y Ecuador. Por último, la intervención puede usar "boinas verdes"; posibilidad que, como anuncia el convenio, cuenta desde 1991 con la anuencia del gobierno del presidente Fujimori.

En los últimos meses, la coincidencia entre el gobierno peruano y los planes de Washington parece haberse nublado. Confluyen en el desacuerdo diversos factores. Del lado estadounidense existe, desde el Congreso controlado por los demócratas, la acrecentada objeción al gobierno peruano con base en las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas oficiales que no reciben sanción; esto ha provocado suspensiones y recortes en ayuda militar; de parte de la administración Bush, parece haberse operado una marcha atrás respecto a la sustitución de cultivos y, en medio de un enrarecido clima electoral, ha cobrado fuerza la propuesta represiva, para la cual incluso se adelantó en febrero la idea de una "fuerza multinacional" que -justificada no demasiado discretamente con base en la corrupción de autoridades y militares peruanos- bien podría haber sido pensada como avanzada de un esquema de intervención.

Del lado peruano, parecen pesar resistencias principalmente militares: tanto la objeción estratégica para enfrentar el tráfico y la subversión a la vez, so pena de profundizar la alianza de esos adversarios, como la renuencia visible de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico de drogas, que fuentes oficiales estadounidenses explican por el avanzado grado de corrupción existente en ellas. La renuncia de Hernando de Soto como asesor

presidencial es, en ese sentido, la notificación pública acerca de la inviabilidad actual de una estrategia conjunta Washington-Lima. Y, por lo tanto, un esquema de intervención estadounidense en el Perú tendría que pasar ahora por un giro en la política del Presidente Fujimori o por un cambio de gobierno. Ambas posibilidades probablemente resulten facilitadas por un fracaso estrepitoso de la política de reinserción que -luego del entredicho abierto con EE.UU., primero en Quito y luego en San Antonio- debe producirse en el curso de 1992.

Diversos funcionarios del gobierno estadounidense aseguran en Washington que, dada la posición del Congreso acerca del rol exterior de Estados Unidos, una intervención en el Perú es más que improbable. Hay que tener en cuenta que la capacidad anticipatoria del Congreso respecto a la política exterior no ha sido muy notable en las últimas tres décadas. Pero, además del humor prevaleciente en el Congreso, importa saber que, de hecho, desde hace varios años ciertas "task-forces" -incluyendo la que en Rand Corporation desarrolla un proyecto sobre "Perú on Transition"- trabajan el caso peruano y, con seguridad, analizan posibles cursos de acción.

La probabilidad de una intervención exterior en el conflicto interno peruano trae un tema aún más importante: los efectos que tal intervención tendría sobre los términos nacionales del conflicto. Es difícil intentar una simulación precisa pero, cuando menos, dos probables derivaciones de la intervención exterior aparecen como altamente probables.

La primera consecuencia sería la gestación de una nueva división de las aguas políticas en el país; esto es un realineamiento de los actores políticos peruanos. La intervención exterior vendría a constituirse en un eje de definición que sustituiría -o, mejor, vestiría- a la guerra civil. Es justo reconocer que Guzmán previó, según prueban sus declaraciones en una publicitada entrevista de julio de 1988, este recodo a partir del cual la

guerra que inició se haría francamente "antiimperialista". Así caracterizado el conflicto, con las resonancias consiguientes en términos de soberanía nacional, sería de verse el lado que escogerían los partidos políticos legales. No es obvio que el APRA y los partidos de Izquierda Unida decidan ubicarse del lado del gobierno que recurra a la intervención exterior para combatir a aquéllos que -hace unos años y antes de que Sendero Luminoso asesinara a gentes de izquierdas- en los partidos de IU se acostumbraba llamar "compañeros equivocados".

Más allá de las posturas que adopten partidos y figuras políticas, una intervención exterior será difícil de aceptar internamente, sea cual fuere el ropaje que use. Perú no está en Centroamérica y hace sólo 16 años que concluyó un gobierno como el de Velasco Alvarado -a quien las encuestas señalan como uno de los dos mejores presidentes que ha tenido el país-, que hizo bandera de un nacionalismo que, como ha sido usual en América Latina, pasaba por el enfrentamiento con Estados Unidos. Y si desde Vietnam aprendimos que una guerra se define no sólo, ni principalmente, según el nivel de tecnología bélica, probablemente Abimael Guzmán no andaba muy descaminado cuando predijo que la internacionalización del conflicto favorecería a su bando.

La segunda consecuencia de la intervención externa sería apresurar un proceso de desmembramiento territorial, para el cual ya hay sentadas algunas bases. El retiro del Estado de buena parte del territorio, para atrincherarse principalmente en las grandes ciudades, ha sido un factor decisivo. Si a eso se añade el proceso interno de demolición de las instituciones estatales, se explica por qué han surgido -antes que la subversión- las llamadas "rondas campesinas", que en ciertas áreas del Perú han ido sustituyendo al aparato estatal para hacerse cargo de funciones policiales y judiciales, en aplicación de criterios primitivos de justicia que incluyen violaciones regulares de derechos humanos. El segundo factor,

bastante menos previsible en su momento, ha venido a ser otorgado por la regionalización, un proceso de remodelación de la estructura estatal, que fuera introducida en la constitución de 1980 como un mecanismo inteligente para redefinir las relaciones entre Estado y sociedad mediante la constitución de instancias intermedias entre el poder centralizado y el nivel local. Al parecer, el esfuerzo resulta tardío, dado que el desmoronamiento del Estado y la crisis social de conjunto ocasionan que sean fuerzas centrífugas las que se vean favorecidas a través de la constitución de las nuevas regiones. Más allá de un gesto como el de un diputado de izquierdas que amenazó en 1990 con anexar su provincia a Brasil si el gobierno central no atendía un pliego de reclamos determinado, lo que el funcionamiento inicial de las flamantes estructuras regionales revela es que la consideración del conjunto del país no ocupa un lugar preeminente en las decisiones. El cada-uno-por-su-lado tiende, en definitiva, a la fragmentación.

Esa tendencia puede ser avivada por una intervención externa, que proporcionaría una excusa aparentemente válida para el desmembramiento. Este se justificaría como provisorio en los primeros intentos; el intento de frenarlo violentamente desde Lima se superpondría con las luchas en curso; y, en definitiva, cada vez se haría más difícil de asir qué es lo que comparten los habitantes del territorio. Ciertamente, Sendero Luminoso, tampoco vería con desagrado que este factor de desorganización adicional, y acaso definitivo, del Estado peruano concurriese al debilitamiento del régimen vigente.

La óptica militar que hoy predomina en el gobierno del Presidente Fijimori anticipa de algún modo ese posible desenlace. De ahí -y de la necesidad de liquidar conflictos externos para atender sólo a los internos- surge la denodada actividad diplomática que busca resolver la vieja diferencia existente con Ecuador, cancelar asuntos pendientes con Chile y ganar la agradecida amistad con Bolivia. El tiempo dirá si estos esfuerzos resultan exitosos

en sus metas y, además, suficientes para exorcizar la amenaza de un desmembramiento territorial.

## VI

El historiador peruano Pablo Macera dijo alguna vez que era necesario advertir ciertas posibilidades, precisamente, para que no ocurran. El ejercicio precedente ha sido presidido por ese mismo ánimo. Además de tal voluntad, está la conciencia de que, como desarrollara finamente otro historiador nacional, Jorge Basadre, la presencia del azar en la historia es ubicua y, felizmente, impide cualquier anticipación excesivamente pretenciosa.

Despojado de cualquier profetismo, este ejercicio ha pretendido subrayar los graves riesgos que están inscritos en la situación del Perú. Nadie puede asegurar que se ha pasado el punto de no retorno. Pero sí puede sostenerse que, en estas circunstancias, la responsabilidad de quienes deciden es mayor que nunca en nuestra historia.

### **POSTDATA DESPUES DEL CINCO DE ABRIL**

El texto precedente fue preparado en febrero de 1992. Luego del autogolpe de Alberto Fujimori, del 5 de abril, probablemente haga falta subrayar que:

1) pensar que la suspensión de la vigencia constitucional y el cierre del Parlamento son prerequisites de una, hasta ahora inexistente, estrategia antisubversiva, equivale a proponer como tal una matanza en gran escala.

2) La definición de la cúpula militar por una opción fujigolpista no necesariamente compromete en ella -ni entera ni durablemente- al conjunto de los cuadros militares; peor aún, el trance de cogobernar no resolverá las demostradas limitaciones de las Fuerzas Armadas en el combate de la subversión; por el contrario, probablemente las debilita más y las divide.

3) La irresponsable aventura recién iniciada acelera y precipita, con seguridad, varios de los factores que harán de una intervención externa el único elemento capaz de alterar en un momento dado el alineamiento de fuerzas internas que se ha demostrado incapaz de sacar al Perú de su agonía.

## REFERENCIAS

COTLER, Julio, *La Cuestión Nacional y la Democracia en el Perú* (borrador), Lima, 1991, ms.

DIEZ CANSECO, Javier, (entrevista), en *Sí*, 24.02.1992.

GUZMAN, Abimael, (entrevista), en *El Diario*, 24.07.1988.

MCCORMICK, Gordon H., *The Shining Path and the Future of Peru*, Rand Corporation/National Defense Research Institute, March 1990.

ROSPIGLIOSI, Fernando, "¿Difícil pero no imposible?", en *Caretas*, 24.02.1992.

SMITH, Michael L., *Rural Development in the Crossfire*, IDRC, Mayo 1991.